

## A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

**María Sandra Julià Julià y José Luis Martínez González, Diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre la posibilidad de retirada de subvenciones europeas por la construcción de la desaladora de Oropesa del Mar, Benicàssim y Cabanes en la provincia de Castellón.**

Congreso de los Diputados, a 10 de julio de 2018

### EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La desaladora de Oropesa, Benicàssim y Cabanes se trata de una inversión proyectada en su día de 63,2 millones de euros con una capacidad ampliable máxima de 130.000 m<sup>3</sup>/día, situada a escasos metros de la playa donde se ubica el complejo vacacional donde se instalan 120.000 turistas en pleno agosto y sin que todavía hayan necesitado usar la desaladora proyectada con carácter de urgencia en 2004 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y aún sin terminar las conducciones desde hace más de una década. Estas infraestructuras denominadas "fantasmas" han sido el foco mediático de toda la prensa provincial y nacional durante años, así como casos de investigación por los mismos.

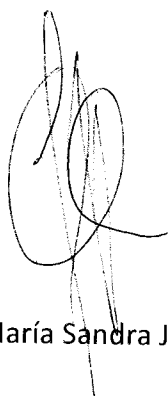
Las desaladoras calificadas como inversión de futuro para el desarrollo urbanístico y turístico de estas poblaciones por Cristina Narbona, han resultado ser un fiasco económico para nuestros vecinos de la provincia de Castellón. El legado del Programa Agua fue apoyado por el exalcalde socialista de Benicàssim Francesc Colomer en 2008, actual Secretario Autonómico de Turismo del Presidente de la Generalitat Valenciana socialista Ximo Puig, que hipotecó las arcas municipales a razón de aproximadamente un millón de euros anual para la amortización de la infraestructura durante 25 años, como el resto de alcaldes del resto de municipios adheridos a los susodichos convenios.

En Oropesa su actual Alcalde del PP, Rafael Albert, y el Alcalde del PP en Cabanes, Artemi Ciurana, no tuvieron reparos en firmar el convenio en 2006, ya que querían desarrollar "la macroubanización Mundo Ilusión", que incluía una expansión de 47.800 viviendas, campo de Golf y el conflictivo PAI "Torre la Sal", denunciado por intereses especuladores y destructores del territorio, ambos adjudicados al grupo Marina d'Or. Según Cristina Narbona afirmó en la Comisión del Senado sobre la Financiación de Partidos Políticos, "Nadie les puso una pistola para que firmaran".

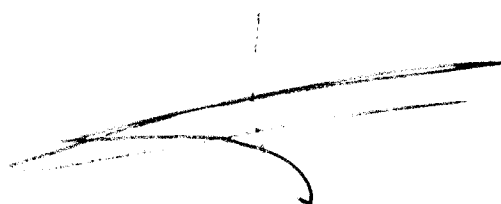
La burbuja de las desaladoras ha sido en la provincia de Castellón una previsión sobredimensionada y no realista del "boom del ladrillo". A este respecto, actualmente, los Ayuntamientos afectados aseguran que su puesta en marcha tendrá consecuencias que lastrará económicamente a los municipios y a sus vecinos, así como cualquier indicio de recuperación económica en estos municipios.

En relación a lo anterior, se formulan las siguientes preguntas:

1. ¿Tiene constancia el Gobierno de la situación en la que se encuentran la desaladora de Oropesa, Benicàssim y Cabanes?
2. ¿Qué planes tiene el Gobierno para la desaladora de Oropesa, Benicàssim y Cabanes?
3. ¿Es consciente el Gobierno de que, si las desaladoras no se ponen en marcha, se tendrá que devolver la subvención? ¿A cuánto ascendería exactamente?
4. ¿Es consciente el Gobierno de que, si la desaladora se pone en marcha, los municipios afectados citados tendrán que hacer frente a cuantiosos gastos de amortización de las instalaciones, mantenimiento y coste inasumible para los usuarios?
5. ¿Qué medidas piensa llevar a cabo el Gobierno para no tener que devolver las ayudas empleadas en la construcción de esta desaladora y, a su vez, no perjudicar a los municipios afectados?
6. ¿Estima el Gobierno que ha tenido la construcción de esta desaladora efectos positivos para la población de estos municipios? En caso afirmativo, ¿Cuáles?
7. ¿Por qué se adjudicó una infraestructura tan cara sin tener las suficientes garantías de que se necesitara el suministro para la expansión de una constructora privada?
8. A raíz de las declaraciones de la Consellera de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, ¿Quién va a asumir los sobrecostes para la finalización de las conducciones y las obras?



María Sandra Julià Julià



José Luis Martínez González

Diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos